

NÚMERO 73

18ª SESIÓN DE PRÓRROGA DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1899

Presidencia del doctor Nougés

SUMARIO—I. Asuntos entrados—II. Aprobación del proyecto de ley sobre impuestos internos para 1899

PRESENTES En Buenos Aires, a los diez días del mes de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno, reunidos en su Sala de Sesiones el señor Presidente y los señores Senadores al margen consignados, se abre la sesión con inasistencia de los señores Crespo con licencia y los señores Alem, Bustos, Civit, de la Fuente Echagüe, Güemes, Ortega, Pizarro, Rodríguez (M. F.) y Tagliaferro, con aviso.

Léida y aprobada el acta de la sesión anterior de 9 del corriente (17ª sesión de prórroga) se da cuenta de los

I

ASUNTOS ENTRADOS

La Cámara de Diputados pasa en revisión los siguientes proyectos de ley:

1º Abriendo un crédito suplementario al departamento de Hacienda por la suma de 132.104 pesos para atender varios servicios—A la Comisión de Hacienda.

2º Sobre legalización de los conocimientos de carga—A la misma.

3º Abriendo un crédito adicional al inciso 12 ítem 1º del presupuesto del departamento de la Guerra, por 90.000 pesos para enganche de soldados—A la misma.

—La misma remite el presupuesto de gastos del Banco Hipotecario Nacional para el año próximo, a fin de que se trate conjuntamente con el presupuesto general—En Secretaría.

—La misma comunica haber aplazado hasta las sesiones del año próximo los siguientes asuntos: 1º ley de marcas de fábricas y patentes; 2º ley de pesca y extracción de huano; 3º proyecto relativo a la Colo-

nia Seruá; 4º intervención en Catamarca; 5º Madero—Al Archivo.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1899

A la honorable Cámara de Senadores:

La presente tiene por objeto hacer a vuestra Honorable Cámara algunas indicaciones referentes al impuesto interno de licores alcohólicos; si vuestra Honorable Cámara los cree justos, esperamos tomará en consideración nuestro reclamo.

La honorable Cámara de Diputados de la Nación acaba de sancionar un impuesto de diez centavos por litro a los licores elaborados en el país; este impuesto será cobrado al licorista.

Nosotros no observamos el impuesto, lo aceptamos pero no en la forma sancionada, pues tenemos la seguridad que dará lugar a muchas defraudaciones en perjuicio del industrial honrado.

Nos parece más equitativo, que el impuesto sea percibido a los fabricantes de alcoholes como se practica en Francia, Alemania y otros países de Europa que han ensayado toda clase de fiscalización de los licores, encontrando esta última la más práctica y segura para el fisco y para el contribuyente. Los legisladores están convencidos que es más fácil cobrar el impuesto directamente a las fábricas de alcohol por la razón sencillísima que son muy pocas estas últimas en relación a la inmensa cantidad de fábricas de licores patentadas y clandestinas.

Los productores de alcohol no serán perjudicados por este sistema, pues el impuesto que pagarán los productores girará a su vez a los licoristas, sus mayores y exclusivos consumidores.

El alcohol paga actualmente un impuesto de diez centavos por litro; agregándole cinco centavos por litro, será un total de doce centavos que sin más trámite abonaremos al destilador al efectuar la compra.

De esa manera ningún licorista escapa a la fiscalización.

ción y el Gobierno consigue con mayor facilidad el objeto anhelado, pues creemos, sin temor de equivocarnos, que percibido el impuesto en esta forma producirá una renta mayor que la que se ha calculado. Esperamos del honorable Senado que hará lugar a lo que solicitamos, pues es justicia.

En representación del gremio licorista

Benito Berthe—J. Clarac—José Huergo

II

Sr. Presidente—Continúa la discusión del proyecto sobre impuestos internos, que había suspendido hasta que estuviera presente el señor ministro de Hacienda.

Sr. Ministro de Hacienda—Pido la palabra.

Yo creo, señor Presidente, que cuando el honorable Senado se preocupe de lo que importa la ley de impuestos internos y de las grandes ventajas que tiene para el fisco, los beneficios que han de producir, ha de comprender que es una ley de todo punto necesaria y que es preciso apoyarla con toda la fuerza, porque de otra manera la República no podría continuar atendiendo a las necesidades de la situación actual y no podría esperarse mejora.

Señor: la ley de impuestos internos es indudablemente una modificación completa del sistema rentístico de la República, y es necesario que se tenga presente que los impuestos internos no son, como se cree, un gravamen á la producción nacional, sino que, por el contrario, son el apoyo más fuerte que puede tener la industria nacional. Ninguna nación del mundo puede vivir al margen de estas dos ramas: de lo que se introduce por sus aduanas, ó de lo que se produce en su interior.

Si los impuestos internos desaparecieran, claro que el vacío que dejarán tendría que ser llenado por los impuestos de aduana. Ahora, pues, dada nuestra industria, el carácter que tiene en este momento y la producción que está lanzando al mercado, ¿qué sucedería en caso de que no se aceptara lo que indica este proyecto?

Que habríamos vuelto al sistema anterior, que harto desgraciado ha sido para la República hasta 1820.

Los impuestos internos tendrían que luchar con los impuestos externos, y entonces serían las entradas de aduana las que tendrían que mejorar la situación del erario: vendríamos á tener esto: que la producción de todas las provincias tendría que luchar con la introducción del exterior.

Supongamos los vinos de Mendoza, de la provincia de Cuyo, los azúcares de Tucumán,

los trigos de Santa Fe; supongamos que estos artículos tuviesen que luchar contra los de producción extranjera; vendría á resultar que tendrían que luchar con desventaja, tendrían las provincias que ir perdiendo su industria, porque no podrían luchar con la producción externa.

En los trigos hay un ejemplo, por lo que puede el honorable Senado ver lo que puede dar el impuesto interno.

Los trigos han hecho imposible que se introduzca esta gran mercancía, que sin duda está destinada á un gran porvenir. Lo que ha sucedido con los trigos sucederá con los vinos y los azúcares.

Los azúcares expulsarán necesariamente la producción exterior, los vinos también, y, más que todo, ya los han expulsado de todas las provincias del interior y sólo en Buenos Aires es donde luchan todavía con alguna desventaja.

De manera, pues, que si el honorable Senado pusiese al Gobierno Nacional en las condiciones de subsanar los pérdidas que deben dar estos impuestos, con impuestos exteriores, con leyes de aduana, resultaría que la industria del interior no podría luchar.

Entre tanto, gravada la producción del interior con este impuesto, es muy poco lo que sufre comparado con la enorme pérdida que tendría si tuviera que luchar con la producción extranjera: esto sería la ruína de ellas. De modo que comprenderán los señores senadores que no hay más fuerte apoyo de la industria del interior que este impuesto.

Si los señores senadores tie en la bondad de considerar esta situación y de ver que es totalmente imposible que el Gobierno Nacional pueda vivir de otra manera que con impuestos externos ó internos, verán que es esa la lucha fatal que nosotros debemos evitar, y que para hacerlo no tenemos otros medios que favorecer nuestra producción, imponiéndole un pequeño recargo que sea al mismo tiempo una ventaja para ella y un recurso para la Nación. Y creo, señor Presidente, que este cambio fundamental en que el Poder Ejecutivo se empeña y que puede traer un cambio completo de la situación rentística, tal vez es la salvación de la República.

Así tomemos, por ejemplo, lo que constituye la riqueza de las provincias del norte. Tomemos el azúcar, los alcoholes.

Los azúcares y los alcoholes han estado protegidos y merecen ser protegidos; pero, si el azúcar y los alcoholes, en el porvenir, no hubieran de contribuir á la formación del erario nacional, resultaría que habría

que ir á buscar en los impuestos externos el déficit que dejaran estos artículos, y entonces la lucha sería fatal.

Además de eso, señor, este medio de volver al sistema rentístico que hemos tenido, de los impuestos exteriores, á los impuestos internos tiene esta gran ventaja: que poco á poco la va á emancipar de la miserable condición del contrabando.

Tomen los señores senadores el trigo y el azúcar. Ni en el trigo ni en el azúcar ni en la harina se puede hoy hacer contrabando. ¿Por qué? Porque nuestra producción hace imposible que nadie piense en traer estos artículos del exterior. Mañana va á suceder igual cosa con el aceite, con las manufacturas de lana.

De manera que vendrá un día en que podremos ir aliviando los consumos del país, bajando los derechos externos, como ya sucede con el trigo.

Esto es considerando á grandes rasgos la importancia del sistema rentístico que el Poder Ejecutivo ha concebido.

Por lo demás, señor Presidente, yo podría hacer demostraciones evidentiísimas de que hoy mismo los artículos más importantes de la República podrían pagar un impuesto y ese impuesto sería ínfimo, respecto de la producción, de las ganancias que tienen, y bastaría para luchar contra los impuestos exteriores.

El azúcar podría pagar hoy derechos internos, sin el menor peligro, así como los aguardientes; los trigos podrían pagar y deberán pagar el año que viene sin ningún peligro; pero, al mismo tiempo, los productores de trigo, de azúcar, de aguardientes, de aceite y de vinos, tendrían la ventaja de tomar aquellos artículos que no pueden producir con mucha más ventaja, haciendo bajar los artículos similares.

Esta consideración es gráfica si se toma, por ejemplo, las provincias productoras de Tucumán, de Cuyo, de Santa Fe, de Entre Ríos y de Buenos Aires; y es un sistema que puede irse aplicando á todas las otras provincias, que traería gran adelanto á todas ellas, porque vivirían de lo propio, tendrían una industria fecunda y al mismo tiempo recursos de todo género.

Es preciso también tener presente que una de las grandes cosas que necesitamos y de las grandes faltas que tenemos, es la falta de capital. Pero, ¿cómo se forma el capital interior? El capital interior se forma no comprando, no pagando, no vendiendo sino dentro de estos mismos recursos que tiene el país.

Hoy, por ejemplo, todos los géneros, los tejidos extranjeros, los pagamos en efectivo, mientras que si los pagáramos con trigo,

con harina, con nuestras producciones, el dinero quedaría dentro del país.

De manera, pues, que si las provincias interiores pagaran un impuesto pequeño por cada una de sus producciones, empezaría á formarse los capitales verdaderos de las provincias y esto formaría el capital nacional. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla: que se compra á la tierra patria, se paga la tierra patria; y lo que se vende á la patria es un capital que queda en efecto dentro de la provincia que lo vende y produce.

Y si se volviera al sistema antiguo, que la provincia de Córdoba, por ejemplo, tenía una aduana para gravar los artículos de la provincia de Tucumán y de Santiago del Estero, á fin de proteger sus productos, y la de Santiago del Estero, contra otras provincias que estaban más al norte, resultaría esto: que hemos hecho completamente lo que más se necesitaba: dar la unidad.

Además de esto, cuando se trabaja por el mantenimiento de la materia prima, la transformación, los individuos se hacen industriales, los pueblos se hacen civilizados por esta razón: porque el trabajo es el productor interno, y porque, á medida que el trabajo lo habilita para ser industrial, pone en el caso de progresar en este trabajo, le da las facultades necesarias para hacerse empresario.

De otro modo, si lo que hubiéramos producido no fuera más que materia prima, esa materia prima iría á servir al trabajo exterior y quitaría esos recursos al país.

Esto es lo que nos ha estado sucediendo desde que principió la guerra de la independencia, en que todas las provincias perdieron su capacidad de producir y perdieron todas las industrias que estaban planteadas y que hubieran tenido un gran desenvolvimiento si hubiésemos conservado la base que antes teníamos.

En el año 40, en la provincia de Córdoba, cuando el bloqueo francés que había hecho encarecer completamente los artículos los extranjeros, la mayor parte de los hombres que vivíamos bien nos vestíamos con telas hechas en Córdoba. Hoy todo eso ha desaparecido completamente debido á ese fatal entusiasmo por la producción extranjera, y por dejar hacer y dejar pasar.

La civilización de los pueblos es aquella que resulta del trabajo propio; solamente el trabajo propio enriquece al trabajador, sólo enriqueciendo el trabajador se establece el capital interno que el país necesita.

Es de advertir que á lo que trata de llegar esta ley es á que las producciones interiores

de la República Argentina retengan esas sumas que se pagan al extranjero por artículos que se consumen dentro del mismo territorio.

Esta además sería la base sólida de ren-der, porque el señor Presidente bien comprende que si nosotros estuviéramos dependiendo siempre de las rentas extranjeras, dependeríamos también de las oscilaciones de la moneda extranjera, nunca de nuestro propio trabajo, de nuestra propia producción, olvidando que la independencia económica es la base principal y única de independencia política.

Ahora mismo, señor Presidente, se puede ver un ejemplo gráfico de esta verdad. No hay más que considerar el resultado que está dando nuestra cosecha de cereales.

Teníamos nuestra moneda, por causas que no son del caso averiguar, depreciadísima, estábamos delante de un verdadero cataclismo económico; sin embargo, viene la producción de cereales argentinos y de la producción de cereales argentinos, con otras industrias adyacentes, resulta un enorme capital que el extranjero tiene que aportar, y resulta esto: que en lugar de imponernos el extranjero el valor de sus libras al precio que hubiera querido imponerlo entre nosotros, tiene que soportar el valor que le impone nuestra producción nacional.

De manera, pues, que si con respecto á todos los otros artículos estuviéramos en la misma situación en que estamos respecto de los cereales, la moneda extranjera estaría supeditada por nuestros valores y no sería más nosotros los que estaríamos dominados por ella.

He dicho, señor Presidente, que este sistema es también el único que puede darnos la base de la verdadera paz y de la verdadera tranquilidad, con respecto á las naciones que nos rodean.

Una vez que vivamos de nosotros mismos, resultará esto: que no tendremos estas cuestiones desagradables, por razón de las aduanas y de contrabandos en las fronteras, que á cada instante tenemos que estar discutiendo; y resultará esto por una razón muy obvia; porque nuestros impuestos descenderán poco á poco de tal manera que podremos encontrarnos en la situación de Inglaterra, cuyos derechos de aduana son ínfimos, si se compara con lo que ella saca de sus impuestos internos.

Cuando se ha dicho que esta ley es inconstitucional, creo que no se ha tenido presente ni históricamente los momentos en que se dió la Constitución, ni tampoco el espíritu de ésta, que es completamente de acuerdo con lo que establece esta ley.

Digo que no se ha tenido presente la época en que se dictó la Constitución; porque en esos momentos era imposible adivinar todo lo que podía dar de sí la República Argentina.

Véase un ejemplo:

En el año 74, que tuve el honor de ser miembro de la Cámara de Diputados, en compañía de algunos colegas concebimos la idea de movilizar los valores en los depósitos de aduana y aún en los internacionales; y con ese fin se dictó la ley de *warrants* que tendía á movilizar esas mercancías que estaban depositadas en la aduana, para pasarlas de mano en mano y formar un valor ó medio de cambio que se pudiera descontar.

En esa ley, raro es decirlo, no pusimos los trigos, porque no había trigo que depositar.

Hoy, señor Presidente, el primer paso que ha dado el gran mercado de depósitos de frutos del Sud, ha sido pedirnos que hagamos los *warrants* para el depósito de trigos, que son precisamente los que tienen más valor en el mercado. ¿Qué resulta de esto? Que si tuviéramos que estar siempre en lo mismo, los trigos no tendrían el valor de traslación, ni de movilización en el mercado.

Del mismo modo á cada tiempo le corresponde sus progresos. Soy uno de los hombres más respetuosos de la letra y del espíritu de la Constitución nacional; creo que de ninguna manera podemos hacer nada que pudiera cambiarla; pero, al mismo tiempo, me parece que en el espíritu de ella entra todo aquello que importa una ventaja, un progreso, un aumento de los recursos de la Nación.

Es cierto que la Constitución nacional no dice que se puedan poner impuestos internos; pero tampoco lo niega, y donde la ley no distingue, es un axioma de derecho que todos debemos respetar, nadie puede distinguir. Desde los romanos, es un principio sano y santo de jurisprudencia, que aquello que la ley no prohíbe es constitucional, es legítimo, es lógico.

Así, pues, la Constitución autoriza, señor Presidente, para imponer impuestos directos; un impuesto interno es un impuesto directo porque recae sobre los fabricantes y no sobre los terceros.

Este impuesto, como todos los demás, es claro que en último resultado recae sobre el consumidor, pero el que lo paga es el fabricante; mientras que los impuestos directos de la aduana vienen á ser pagados por el consumidor.

De manera que quizá no habría como negar que la Constitución ha permitido que se

imponga este impuesto directo, porque es un impuesto directo y porque es imposible darle otra denominación.

Además, la Constitución permite también que el Gobierno se cree todos aquellos recursos que necesite para vivir, y desde que no puede vivir sino con impuestos internos ó externos, no hay más que ver si la Constitución ha establecido que deben arruinarse las producciones interiores por razón de la introducción del exterior.

Sería esto una consecuencia que probaría demasiado, ó más bien dicho, sería absurda, porque entonces estaríamos condenados por la letra de la Constitución, cuando estamos salvados por su espíritu, y no podemos suponer que se haya pensado en matar nuestra industria interior, pues eso es lo que importaría la supresión del impuesto.

Así es que, bajo este punto de vista, es imposible sostener que este impuesto sea ni gravoso á las provincias, ni inconstitucional; gravoso á las provincias no puede ser, porque si se retira caemos en mayor peligro, pues tendríamos que reponerlo con cualquier otro impuesto; inconstitucional no puede ser, porque es un recurso legítimo de la Nación y porque no está prohibido; ventajoso es, puesto que es una pequeña proporción de la riqueza pública interna que se toma para poder hacer el canje de esa misma industria, para poder emanciparnos de la exportación externa.

Creo, pues, que el Senado sancionará esta ley en vista de los datos incontrovertibles que la autorizan y que la apoyan; y hará un gran beneficio á la Nación, pues la pondrá en el caso de bastarse á sí misma, proteger su industria y salvar los intereses comprometidos en ella, que de otra manera estaría completamente amenazada.

Yo invoco la ciencia y la conciencia de todos los señores senadores, y les pregunto ¿que sucedería el día que el Gobierno nacional tuviese que buscar una renta en las aduanas exteriores?

¿Cómo se salvarían las industrias que producen los artículos de primera necesidad, cuyos recursos hoy pedimos á la producción interna? ¿Habría posible comparación entre las ventajas que sacaría de no pagar este impuesto, y las desventajas que le vendrían encima por pagar á las aduanas exteriores? Es imposible, señor Presidente.

Entre tanto, es un dilón de hierro; ó el Gobierno vive de impuestos interiores, ó vive de impuestos exteriores. Si vive de los primeros, tiene que gravar indudablemente á la industria interna; y si vive de los segundos, es natural que las ganancias que ella produce contribuyan en algo para el país.

Además de esto, es preciso tener presente, y los señores senadores lo saben, que los impuestos internos están afectados al Gobierno, según disposiciones del Congreso, á servicios mucho más serios é importantes en los que está comprometida la honra del país.

No puedo entrar en otras explicaciones, porque los señores senadores saben muy bien lo que me refiero.

Entre tanto, si estos impuestos no existieran, el Gobierno se encontraría incapacitado para dar cumplimiento á leyes dictadas por el Congreso.

Tan serio es esto, que quizá los señores senadores, como se trata de una cosa nueva, y como no ha habido tiempo de formular una estadística, ignoran la importancia que tienen los impuestos internos.

En estos momentos en que apenas se gravada la producción interior, en estos momentos en que el trigo no paga nada, que los azúcares tampoco contribuyen á la renta, estos impuestos producen de doce millones de pesos moneda nacional. Y bien: con once ó doce millones de pesos nosotros salvamos la industria.

Es claro, señor Presidente, que siguiendo adelante en este sistema de ir gravando industrias, que relativamente están enriquecidas, podemos muy bien llegar á hacer la supresión de la mitad de los impuestos interiores.

Si estas razones no bastan para que el Senado forme una opinión verdaderamente concluyente de lo que la ley importa, que sería preciso que la honorable Comisión de Hacienda del Senado se contrajese á hacer un estudio más serio de las estadísticas para que se convenciese de lo que acabo de decir, porque es la pura verdad.

He dicho.

Sr. Gil—Pido la palabra.

Al objetar esta ley de impuestos interiores en la sesión anterior, no he tenido en cuenta más que los términos claros, á mi juicio, de la Constitución, y no me he preocupado ni de la necesidad que el Tesoro tiene en la actualidad, del producido de esta renta, ni de los beneficios que á la industria nacional producirá, según lo afirma el señor Ministro de Hacienda, una legislación basada en los principios que él propone.

Y no he tenido en cuenta esas consideraciones, señor Presidente, porque, á saber, ante la disposición terminante de la Constitución, todas esas ventajas y todas esas necesidades tienen que ceder, tanto más cuanto que los fondos que el señor Ministro necesita para subvenir á las necesidades del Tesoro, puede arbitrarlos de otros

eciso tener pre
es lo saben, qu
in afectados p
ciones del Cong
erios é importan
netida la honra

otras explicaci
dores saben

impuestos no
contraria in
nto á leyes dic

quizá los señ
a de una cosa
o tiempo de
ran la import
internos.
n "que apenas
terior; en esto
no paga nada
o contribuyen
roducen de
moneda na
e millones de
ustria.

ente, que sigu
de ir gravand
eute están en
n llegar á hac
los impuestos

stan para que
ón verdaderam
ley importa
honorable Com
se contrajese
de las estadis
de lo que acab
verdad.

labra.
impuestos inter
he tenido en cu
claros, á mi ju
me he preocup
el Tesoro tiene
ido de esta y
á la industria
lo afirma el
na legislación
él propone.
cuenta esas co
dente, porque
terminante de
ventajas y tod
que ceder, tal
os que el señor
enir á las neces
arbitrales de

manera, aun con impuestos internos, pero estableciéndolos de un modo distinto del que se proyecta por la ley que está en discusión. La protección á la industria también puede dispensarse de otro modo.

En esta materia como en cualquier otra, el Gobierno federal no puede usar de facultades, sino cuando le están expresamente conferidas por la Constitución. Así es que el argumento hecho por el señor Ministro hace un momento, de que la Constitución no prohíbe establecer impuestos internos, y que donde la ley no distingue nadie debe distinguir, es un argumento completamente falso, tratándose de esta cuestión.

En materia de gobiernos y en materia de delegaciones, como son éstas, hay que atenderse,—en cuanto á los poderes que puede usar cada gobierno, el Gobierno nacional ó los gobiernos de provincia,—á la letra estricta de la Constitución, y la letra de la Constitución dice que fuera de los impuestos exteriores, que son exclusivamente del Gobierno nacional, solamente pueden establecerse por éste impuestos internos directos, y por tiempo determinado.

Impuestos directos no son estos que el señor Ministro de Hacienda propone, porque si es cierto que se imponen y se hacen pagar al fabricante, todos éstos impuestos elevan el precio del producto sobre que recaen y por lo tanto los paga el consumidor. Esta es la definición y lo que caracteriza á los impuestos indirectos.

Hay además, señor Presidente, disposiciones de los tribunales altamente respetables, que establecen esta misma doctrina. La Corte de Estados Unidos ha resuelto repetidísimas veces,—porque en la Constitución de los Estados Unidos hay una disposición semejante á la nuestra,—que son impuestos directos sólo aquellos que gravan la tierra; y los impuestos de capitación, y especialmente los impuestos de consumo, que allí llaman sisas, se consideran como impuestos indirectos y están, por lo tanto, fuera de la disposición del artículo de la Constitución nacional.

Yo no objeto el impuesto para darlo á las provincias ó queriendo insinuar que este impuesto deberían tenerlo ellas y no la Nación. Según la Constitución, la facultad de imponer es concurrente entre los dos gobiernos. Las provincias, con excepción de los impuestos de exportación é importación que son de legislación exclusivamente nacional, pueden establecer impuestos, aun directos y sobre la materia á que se refiere el inciso 2º del artículo 67 de la Constitución, de la misma manera que puede el Gobierno nacional establecerlos. Pero esta facultad

concurrente de los gobiernos provinciales y del Gobierno nacional no puede extenderse hasta el punto de que el Gobierno nacional, ultrapasando las disposiciones terminantes de la Constitución, vaya á imponer sobre cosas que la Constitución nacional ha dejado para que sean impuestas exclusivamente por las provincias. Aquí viene á propósito recordar el origen de esta disposición constitucional que el señor Ministro decía que era necesario, para interpretarla, tener en cuenta. Precisamente, teniendo en vista dos antecedentes de este artículo, yo encuentro más fortalecida la opinión que he expuesto á la Cámara y que en este momento sostengo. Esta Constitución, como es sabido, ha sido calcada casi de la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos respecto de los impuestos internos, dice que el gobierno federal puede imponer contribuciones, sisas y toda clase de impuestos, sin hacer distinción entre directos é indirectos, con la sola distinción de que los impuestos directos se establecerán en relación á la población de cada Estado, y que los impuestos indirectos serán iguales en toda la nación.

Los constituyentes argentinos, al disponer sobre las cuestiones de impuestos y teniendo en vista esa disposición de la Constitución americana, han restringido, sin embargo, la prescripción del inciso 2º del artículo 67 y lo han limitado á los impuestos directos.

¿No sería recordar este antecedente, señor, una manera justa de interpretar esta disposición constitucional, y establecer que ella no tiene el alcance que el señor Ministro le quiere dar y que ella se refiere solamente á una clase de impuestos y no á todas las materias sobre que puede imponerse en el interior del país? Para mí, señor Presidente, es evidente. Las contribuciones directas gravan á todo el país por igual y los impuestos indirectos lo hacen de una manera muy desigual. Así Tucumán, que tiene azúcar, puede contribuir con una cantidad desproporcionada con relación á las demás provincias, que no tienen esa misma producción ó que la tienen menos desarrollada; y en todos los casos, un impuesto indirecto, cualquiera que sea el objeto sobre que recaiga, siempre tendría que imponer más á una localidad que á otra, y no tendría entonces el espíritu ni llenará el propósito que la Constitución tiene al querer que todos los impuestos sean sufragados de una manera proporcionada por cada una de las provincias.

El sistema rentístico, pues, que el señor Ministro quiere implantar con este proyecto, no es el sistema rentístico de la Consti-

tución. La Constitución, al establecer la facultad de cada gobierno en materia de contribuciones, da al Gobierno general de de una manera exclusiva los impuestos exteriores, y da, como regla general, los impuestos internos á los Estados, y por una excepción confiere al Gobierno general la facultad de fijar impuestos directos en el interior; y á mi juicio, señor Presidente, el Gobierno nacional solamente puede usar del impuesto directo interno cuando los demás ramos de contribución que son exclusivos y que deben formar el tesoro nacional, son insuficientes, ya sea porque no produzcan lo necesario ó porque, en caso de necesidad y urgencia, la Nación se encuentre en circunstancias de urgente necesidad.

El impuesto interno nacional, como he dicho, tiene que ser un impuesto directo, y además, tiene que establecerse de la manera que el artículo 4º de la Constitución lo dispone. No puede el impuesto, de cualquier manera que se establezca, percibirse como el señor Ministro lo propone; él no puede imponer directamente ni al fabricante ni al consumidor: tratándose de impuestos internos, él tiene que dividir la suma que quiere sacar de ese impuesto, entre las provincias, haciendo la distribución de una manera proporcional á la población de cada una de ellas.

El artículo 4º es terminante y no deja lugar á duda ni admite otra interpretación.

Así, pues, para mí, esta ley no es solamente inconstitucional, porque se refiere á ramos de impuestos que el Gobierno nacional no puede tocar, sino que, aunque fuera de aquellos que la Nación puede sancionar, no se establece de la manera como lo prescribe el artículo 4º de la Constitución.

Sr. Doncel—Pierso, señor Presidente, que este proyecto creando los impuestos internos, es perfectamente constitucional, y al mismo señor Senador por San Juan que me he precedido en el uso de la palabra, ha llegado á aceptar que la Nación puede crear impuestos internos; pero dice que cuando la renta de aduana, que es á la que se refiere el artículo 4º de la Constitución, no alcanza para subvenir las necesidades de la Nación....

Sr. Gil—No he dicho eso, ni sostengo eso; lo que he sostenido es lo siguiente: la Nación puede establecer impuestos internos, cuando son impuestos directos.

Sr. Doncel—A eso iba llegar.

Sr. Gil—Pero al plantear el señor Senador la proposición que va á contestar, no lo hace fielmente.

Sr. Doncel—Al principio el señor Senador sostuvo que la Nación no podía esta-

blecer impuestos directos sino cuando concurrían los casos establecidos en el artículo 2º del artículo 67, es decir, cuando concurrían estas tres condiciones: que exigían la defensa, la seguridad común y el bienestar general del país.

Sr. Gil—No, señor, no he dicho eso absolutamente, ni hoy ni ayer. He mencionado esos casos para sostener que los impuestos internos vienen, según el espíritu de la Constitución, en segundo término, después de los impuestos exteriores; que la Nación debe sufragar los gastos de la administración con los impuestos exteriores que cuando éstos no bastan, debe seguir con los impuestos internos: pero no he dicho que sólo en ese caso deben establecerse.

Sr. Doncel—Había comprendido eso, pero quería llegar á esto en que el señor Senador está conforme: el Congreso tiene la facultad para sancionar una ley de impuestos internos, cuando las rentas de aduana sean suficientes para llenar los servicios de la Administración.

Sr. Gil—Cuando el impuesto interno es un impuesto directo.

Sr. Doncel—Perfectamente.

Ahora el señor Senador dice que, en ese caso, los impuestos internos que pueda crear el Congreso de la Nación deben ser impuestos directos, y que los impuestos que creen por el proyecto en discusión no son impuestos directos, como lo sería, por ejemplo, el impuesto sobre la tierra.

Pero yo digo, ¿qué diferencia esencial hay entre el impuesto sobre la tierra y el impuesto, por ejemplo, sobre la producción de azúcar?

El señor Senador dice: el impuesto sobre el azúcar pagado por el industrial que produce, es un impuesto indirecto porque concurrendo á encarecer el azúcar, lo paga el consumidor.

Yo le contesto al señor Senador que estas distinciones son enteramente teológicas, porque el impuesto sobre la tierra, bajo el mismo orden de razonamiento, es un impuesto indirecto, porque concurrendo á encarecer los productos de la tierra, lo paga también el consumidor; son, repito, distinciones enteramente teológicas.

El señor Senador decía que la Constitución de los Estados Unidos establece que los impuestos que el Congreso tiene facultad de crear deben reunir estas condiciones: ser proporcionales, tratándose de los impuestos directos, é iguales, tratándose de los impuestos indirectos. La Constitución de los Estados Unidos no establece semejantes distinciones y la nuestra, aun que no usa los mismos términos que aquella en el

no, ta
der l
La C
á qu
mer
á la
de li
ya y
hong:
Esta
y F
porta
sue
son
en ser
se t
trat
ala de
pitaci
lores.
Ahora
él es
bucior
propo
misn
la Na
dad co
ajan.»
La de
no son,
puesto; t
mar.
Por co
concurra
lectamen
id del C
que bast
estos
no al
impuesto
El mis
demá
Congres
observar
ectura
Corresp
as aduan
chos de i
evaluacio
lomes e
que esto,
nacionales
decir, que
cones cu
bastan.
Hay un
y los de
establece
puestos p
puestos it
solamente

ino cuando...
idos en el...
decir, cu...
diciones: qu...
ad común...

ne dicho es...
He men...
er que los...
in el espíri...
término...
eriores; qu...
stos de la...
os exterior...
debe segu...
o no he di...
establecer...
mprendido...
que el señ...
ngreso tie...
y de impu...
de aduan...
los servicio...

esto infer...
ente. qu...
ce que, en...
que pueda...
ben ser imp...
uestos que...
cusión no...
sería, por...
ra. ...
ia esencial...
ierra y el...
producción...

mpuesto po...
ustrial que...
directo po...
azúcar, lo...

enador que...
ente teolog...
tierra, bajo...
to, es un...
curriendo...
ierra, lo...
repito, di...
as. ...
e la Consti...
establece...
o tiene fac...
is condicio...
se de los...
tratándose...
Constitución...
ce semejan...
que no usa...
quella en...

no, tampoco expresa lo que el señor Se...
der hace decir á la de los Estados Unidos.
La Constitución argentina, en el artículo...
á que antes me he referido, haciendo la...
numeración de los recursos con que se pr...
á los gastos de la Nación, concluye así:
de las demás contribuciones que, equi...
ya y proporcionalmente á la población,
ponga el Congreso general.»
Esta frase «contribuciones que equitati...
y proporcionalmente á la población»...
porta establecer las dos reglas á que de...
sujetarse los impuestos. Estas dos re...
son: que deben ser uniformes, que de...
ser iguales. Deben ser uniformes cuan...
se trata de impuestos como estos de...
tratamos; deben ser iguales, cuando se...
ta de impuestos directos que, como el de...
pitación, se basan en la población y no en...
lores.
Ahora, volviendo al inciso 1º del artículo...
él establece lo siguiente: «Imponer con...
buciones directas por tiempo determinado,
proporcionalmente iguales (vuelve á usar...
mismos términos) en todo el territorio...
la Nación, siempre que la defensa, segu...
dad común y bien general del Estado lo...
ijan.»
La defensa, seguridad común y bien general...
son, puede decirse, el motivo del im...
uesto; son los objetos á que se ha de des...
nar.
Por consiguiente, no hay necesidad que...
concurran las tres causas para que sea pe...
ejamente correcto el ejercicio de la facul...
del Congreso de crear impuestos; sino...
basta que sea necesario llenar uno solo...
estos objetos, cuando las rentas de adua...
no alcancen, para que sea motivado el...
mpuesto.
El mismo artículo 57 hace referencia á...
demás impuestos que puede crear el...
Congreso, fuera de los de aduana como lo...
observarán los señores senadores por la...
ectura que me voy á permitir hacer. Dice:
Corresponde al Congreso: 1º Legislar sobre...
as aduanas exteriores y establecer los dere...
chos de importación, los cuales, así como las...
valuaciones sobre que recaigan, serán uni...
formes en toda la Nación, bien entendido...
que esto, así como las demás contribuciones...
nacionales, prodrán ser satisfechas, etc.» Es...
decir, que puede establecer otras contribu...
ciones cuando los impuestos de aduana no...
bastan.
Hay una diferencia entre estos impuestos...
y los de aduana que la misma Constitución...
establece, y es que los de aduana son im...
puestos permanentes, mientras que los im...
puestos internos, las contribuciones directas...
plamente quedan autorizados cuando aque-

llos no alcancen: esta es la única diferencia que hay.

El señor Senador por Salta en realidad no ha manifestado una opinión terminante sobre esta cuestión en la sesión anterior, sino que ha expresado ciertas dudas que él fundaba en lo siguiente: que es facultad de las provincias crear impuestos de la naturaleza de los comprendidos en este proyecto y que no se explicaba cómo la Nación podría también crear impuestos sobre los mismos ramos de renta. Pero esto no es de llamar la atención.

En los Estados Unidos, como lo decía muy bien el señor Senador por San Juan, existe este sistema de impuestos internos y el Congreso de aquella nación los establece sobre los mismos ramos de renta concurrentemente con las provincias: queda á la prudencia del Poder Nacional y de los Estados no recargar extraordinariamente una industria.

Después de lo que ha manifestado el señor Ministro de Hacienda á este respecto, creo que no necesito extenderme más.

Sr. Figueroa—Pido la palabra.

Sr. Gil—Si me permite el señor Senador, voy á hacer una ligera rectificación sobre tres puntos.

Yo no he sostenido, señor Presidente, que para que se pueda establecer el impuesto interno á que se refiere el artículo 67, sea necesario que se reúnan las tres condiciones de que ese artículo habla. Es indudable, como cualquiera que lea el artículo lo comprenderá, que una de estas condiciones basta: basta que la seguridad de la Nación esté en peligro para que se pueda establecer el impuesto. Además, señor Presidente, este es un punto de detalle; lo que yo sostengo es que el impuesto debe ser directo, y no son teologías esto de que unos impuestos sean directos y otros indirectos. La ciencia reconoce esa diferencia y los Tribunales la acatan y la declaran.

Por otra parte, la Constitución ¿por qué habla de impuestos directos? ¿Por qué no dice impuestos internos ó solamente impuestos? Esa palabra *directo* ¿no califica la palabra anterior y no especifica una clase de impuestos? ¿No es verdad que no se refiere á todos los impuestos que se puedan establecer en el interior del país? Eso es indudable. Se ha negado que la Constitución de los Estados Unidos diga que los impuestos directos deben establecerse en proporción á la población: ahí está el artículo de la Constitución, sección 3 del art. 1º, que dice esto: Los representantes al Congreso y los impuestos directos se establecerán en proporción á la población. El señor Secretario tiene ahí el libro y puede leerlo.

Sr. Presidente —¿Pide la lectura?

Sr. Gil —No la pido, porque los señores senadores conocen la Constitución y saben que ella dice fielmente lo que he repetido.

La referencia que antes hacía á las condiciones que establece el inciso 2º del artículo 67, no tenía más objeto que establecer este hecho, que seguramente es incidental respecto del punto en debate: que, según la Constitución, no es una renta ordinaria de la Nación el impuesto interno; que solamente vive la Nación de los impuestos externos; que el impuesto interno se establece cuando existe la necesidad pública á que ese artículo se refiere. Repito, esta no es la cuestión: es un incidente de la cuestión.

He concluido.

Sr. Figueroa —Pido la palabra.

Esta cuestión es importantísima; quizá es la más grave que se haya sometido á la consideración del honorable Senado, y no obstante las explicaciones dadas por el señor Ministro de Hacienda, como también las del señor doctor Doncel, no han cambiado la primitiva opinión que sobre este punto tuve cuando la manifesté en forma de duda.

Se trata de impuestos internos á cinco renglones de la producción *posible* de la República. Y digo posible, porque está en embrión, exceptuando los alcoholes y cerveza; porque la industria de fósforos y naipes está poco radicada en el país. Ayer yo decía: ¿Hasta dónde va el derecho de la Nación en materia de impuestos y dónde se detiene? ¿Hasta dónde va el derecho del Estado, de la provincia, en su facultad de imponer y dónde se detiene? Y recordé después, y no tuve oportunidad de decirlo, una frase del presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en que, contestando esta pregunta, decía: «Es tan difícil responder, como analizar dónde están propiamente las juntas de los colores descompuestos por el prisma».

De manera que la cuestión es difícil en la práctica; en la teoría es un poco más sencilla su resolución.

Los tribunales federales ya han pronunciado algunas resoluciones en varios casos que han ocurrido, y estos casos llegarán á servir para establecer una jurisprudencia al respecto.

Es sabido que el impuesto es un incidente de la soberanía; sin la facultad de imponer, sin la percepción de la renta, no hay jurisdicción, no hay mando, no hay soberanía. y, aun cuando la facultad de imponer del Gobierno nacional llegara á la fabricación nacional concurrentemente con la provincial, en ese caso la industria se movería pesadamente en la República, porque habría

dos impuestos: el nacional y el provincial sobre la misma cosa.

Yo no voy á discutir, señor Presidente, la necesidad de establecer este impuesto como medio de renta; estaré de acuerdo con el señor Ministro en todo aquello que me referido, haciendo subir la percepción del impuesto de once á doce millones; pero en todo caso, haré esta declaración perfectamente clara: si yo acepto el impuesto, no, será para la capital federal y territorios nacionales, porque sobre la capital federal y territorios nacionales ejerce jurisdicción exclusiva el Gobierno nacional, y, por lo siguiente, su Legislatura, que es el Congreso nacional.

Sólo así podría aceptar los impuestos internos, de ninguna manera sobre los Estados ó provincias que apenas se mueven, quedándose en su miseria, cobrando los impuestos que pueden para atender á aquello que prescribe la Constitución, es decir, á la administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria, para los efectos el Gobierno federal les garantiza la forma republicana.

La fabricación nacional, señor Presidente, está perfectamente equiparada por el artículo 10 de la Constitución, á la producción extranjera que hubiese pagado el impuesto en la Aduana.

Y para que no se crea que aquí yo voy á hacer una tesis, voy á leer el citado artículo.

«En el interior de la República de los derechos la introducción de los efectos de producción ó fabricación nacional, como la de los géneros y mercancías de procedencia extranjera, pagadas en las aduanas exteriores.»

De modo que cuando la Constitución establece tan bien en el sistema rentístico habla con tanta claridad que equipara el producto fabricado en el propio país á la mercancía de efecto ultramarino que se hubiese introducido por la aduana y pagado el impuesto, quiere decir que está libre y lo establece en un modo claro.

Creo que no hay mejor comentario de este artículo. Él se liga estrechamente con el artículo 11 que dice: «Los artículos de producción ó fabricación nacional que pasen por el territorio de una provincia á otra serán libres de los derechos llamados de tránsito, siéndolo también los carruajes, buques ó bestias en que se transporten; y ningún otro derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su denominación, por el hecho de transitar por el territorio.»

Y la explicación de este artículo está en nuestra historia pasada. Lo ha dicho

el provi-

Presiden-
mpuesto
uerdo
aquellos
percepción
lones; per-
ción per-
mpuesto
al y terr-
pital fed-
urisdicción
y, por
es el Con-

impuesto
bre los E-
nueven
ando lo
aquellos
lecir, as-
el régimen
ia, para
es garanti-

ior Presiden-
da por
la produ-
lo el impo-

aquí yo
do artícu-
blica
de los
nacional
cancias de
res.
onstitución
ma rent-
equipara-
la mercan-
abiese intro-
o el impo-
lo estable-

comentario
echamente
s artículo
nacional
ados de
ritorio de
s de los
siéndolo
bestias en
o derecho
te, cualqu-
or el hec-

artículo est-
ha dicho

bien el señor Ministro: en la época de nues-
tra organización los diferentes Estados pe-
dían establecer este impuesto por el derecho
de transitar el territorio. Entonces se les
replicó: no es posible que ustedes impongan
esta misma contribución que ya ha sido sa-
tisfecha en la aduana nacional.

Pero, así como también las provincias
y los estados no pueden imponer seme-
jante contribución por el hecho del trán-
sito, pregunto yo: ¿por el hecho de la
venta, una vez que se estacione la mercade-
ría, podrá ser establecido el impuesto? De
ninguna manera. ¿Por el hecho de pararse,
objeto de la venta, vendrá el derecho?

Entonces, pues, explicado este punto so-
bre el tránsito, queda explicado también
cómo se encuentra una perfecta conexión
entre el artículo 10 y 11: el artículo 10
equiparando la fabricación nacional con los
artículos que hubiesen pagado ya el derecho
de aduana, y el artículo 11 declarando esta
prohibición para establecer impuesto por el
derecho de transitar, á lo cual se sigue que,
colocándose la mercancía en el pueblo don-
de debe expendirse, es libre también de
derecho.

Ocurrió un caso, señor Presidente, hace
algunos años en la provincia de Salta.
Aquella municipalidad, que tenía facultades,
estableció un impuesto á los azúcares, tanto
de la localidad como también de las provin-
cias limítrofes que se introdujesen á la Ca-
pital; y dijo: por cada libra de azúcar que se
introduzca al municipio de la Capital, se
pagará 1½ ó 2 reales. De la medida se recla-
mó ante la justicia nacional, y ella declaró,
después de mucho discutir, que esa munici-
palidad (hubiera sido lo mismo la Legislatu-
ra) no tenía tal facultad, porque contrariaba
este principio que establece la verdadera
libertad de comercio.

Sr. Rojas—Pero sería por ser muy alto
el impuesto; no por inconstitucional.

Sr. Figueroa—Por inconstitucional.

Sr. Rojas—Por libra, real y medio era
una exageración.

Sr. Figueroa—Por arroba. Cuando se
atacó el impuesto, fué por inconstitucional y
así se declaró por la justicia.

Es sabido, señor Presidente, cómo se forma
el tesoro de la Nación. No dice en ninguna
parte de la Constitución que pueda formarse
con estos impuestos internos; y aunque en
general habla de otras contribuciones que
equitativamente el pueblo de la República
deberá pagar en caso necesario, seguramen-
te no se refiere á éstos.

Entonces los medios que el Gobierno fe-
deral debería tener en sus manos para pro-
curar el aumento de la renta por tales ó

cuales motivos, sería, por ejemplo, elevar los
impuestos.

Vengamos ahora á un caso más práctico—
y siento no haber tenido tiempo suficiente
para estudiar en toda su extensión este
asunto tan grave, pues que apenas hemos
dispuesto del angustioso término de ayer á
hoy.

Las provincias han delegado parte de su
soberanía en el Congreso federal, y la otra
la han retenido. Sobre la parte delegada
ellas consienten las leyes del Congreso; la
parte retenida la reservan para sí y forma
su autonomía, su soberanía.

Nuestro derecho argentino es muy ante-
rior á la Constitución que le dió forma: el
derecho de las provincias ó de los Estados,
es anterior al derecho nacional, al derecho
federal; así es que para estudiar todas estas
cuestiones, para ilustrarme mejor, yo arran-
co de lo que dispone el derecho de las pro-
vincias ó de los Estados, puesto que el de-
recho de los Estados es anterior á la Nación.

El derecho de los Estados ó provincias:
esta es la regla; el derecho de la Nación ó
Gobierno federal, es la excepción.

Las provincias se han constituido y se
han organizado bajo gobiernos autónomos,
independientes y soberanos en todo aquello
que no han delegado su soberanía: ellas
también tienen su sistema rentístico, tienen
sus contribuciones, establecen sus impuestos.

¿Para qué? Para vivir de ellos, con aque-
llos principios que la Constitución establece
á fin de poderles garantizar el régimen repu-
blicano representativo federal.

Si estas contribuciones internas fuesen de
un modo claro y determinado á establecerse
en aquellos puntos, con prescindencia de
las necesidades que esos pueblos tienen
para vivir autónómicamente, vendría á ce-
garse una fuente fiscal importante de esos
Estados, que les permite desarrollarse bajo
los principios que la ley fundamental pro-
clama.

El impuesto, por otra parte, vendría á ser
desigual; y ya se sabe que, según el sistema
de la Constitución, el impuesto debe ser
equitativo.

Si á una industria que recién nace en la
provincia de Jujuy, en la provincia de Cata-
marca, se le recargara con este impuesto, se
cegaría esta fuente de recursos.

¿Para quiénes? Para los Estados provin-
ciales, hoy; mañana para el Gobierno federal.

De este modo desaparecería la base de la
igualdad del impuesto; y económicamente
sería un ensayo desgraciado.

Resumiendo estas conclusiones: pienso
que la Nación no tiene facultad para impo-
ner esta contribución en los Estados ó en

las provincias; que el Congreso sólo, tiene derecho de hacerlo con los habitantes de la capital federal ó en los territorios nacionales: establecerlo en las provincias sería inconstitucional según los artículos 10 y 11 que acabo de explicar.

Sería ruinoso también, económicamente hablando, porque perjudicaría el desarrollo de industrias que apenas pueden moverse en provincias lejanas, pobres y mediterráneas.

He de votar, pues, en contra de semejante impuesto que, como he dicho, sólo podría establecerse en los territorios federales y en la capital federal.

Sr. Rojas—Pido la palabra.

He escuchado con mucha atención á los señores senadores que impugnan este proyecto encarándolo bajo su faz constitucional, y, francamente, ninguno de ellos ha hecho en mi concepto un solo argumento que pueda justificar la oposición que en este sentido hacen.

Los artículos 10 y 11 á que se refiere el señor Senador por Salta, no son aplicables á este caso.

Sr. Figueroa—¿Le parece?

Sr. Rojas—El señor Senador sabe perfectamente cuál es el origen de esa disposición, y que, ni á estar á su letra, puede aplicarse al caso actual.

Los señores senadores saben, principalmente el señor Senador por San Juan, que estos impuestos directos pueden solamente aplicarse en casos excepcionales, en los casos que la misma Constitución determina; y yo digo, señor Presidente, que estamos precisamente en uno de esos casos, tal vez en todos estos casos á que la Constitución se refiere.

Lo que la Constitución ha querido es que no se establezcan estos impuestos internos para formar la renta ordinaria y permanente de la Nación á objeto de hacer frente con ellos á los gastos ordinarios del movimiento administrativo nacional.

Para eso ha determinado en primer término los impuestos aduaneros, los impuestos á la importación; pero ha dicho, como excepción: podrá también establecer los impuestos directos ó sea los impuestos internos en tales ó cuáles casos.

Estamos, pues, en este caso: la Nación está pasando por una situación excepcional, por una situación de angustias; y en tal situación ¿qué hace?

O, como dice el señor Ministro, se hacía posible la importación de todos los artículos similares de producción nacional, para hacer la renta por este medio, ó se mantenía los impuestos proteccionistas que el Congreso había dictado á objeto de favorecer la

producción nacional, poniendo á la vez un pequeño impuesto á esa producción que contribuyese de esa manera á llenar las necesidades públicas que no pueden satisfacerse por el impuesto aduanero.

Así, pues, estos impuestos, que yo creo que deben hacerse extensivos á todos los artículos de producción nacional, encuentran favorecidos por nuestro impuesto aduanero en este momento, están perfectamente bien establecidos, no solamente cuanto á los artículos á que se refiere el proyecto, sino á todos los demás que están protegidos por un impuesto muy alto que hemos establecido para los similares con el objeto de favorecerlos.

Yo digo: ¿por qué los señores senadores aceptan con tanto placer que los productores de la Nación estén soportando las cargas del impuesto aduanero para favorecer la producción nacional, la producción del azúcar, la producción del vino, sin ver que este medio se limita la introducción de mercancías, por consiguiente, la renta pública vienen á impugnar este pequeño impuesto que se trata de establecer para llenar las necesidades que no pueden ser satisfechas por las rentas generales?

Estos impuestos, señor Presidente, han sido creados en medio de una situación de angustia de la Nación, para objetos determinados, como el mismo mensaje que acompaña al proyecto lo expresaba en el momento en que éste fué presentado.

Es sabido que tienen un objeto determinado: no tienen, pues, carácter permanente, que es lo que la Constitución no ha querido que tengan; sino un carácter transitorio, para llenar necesidades transitorias, para salvar las necesidades impuestas por una situación excepcional.

Bajo tal concepto, señor Presidente, creo que el impuesto es perfectamente constitucional; que, económicamente, es perfectamente conveniente para los intereses nacionales; y que no puede haber razón alguna que justifique la oposición que á él se hace.

Por estas razones, he de dar mi voto á favor del proyecto que está en discusión.

Sr. Figueroa—Pido la palabra.

Había citado la opinión de un gran jurisconsulto para demostrar cómo esta disposición era tan difícil en su aplicación práctica.

Ese célebre jurisconsulto, Mr. Marshall, decía lo que acabo de expresar hace un instante para justificar también las razones que animan á todos aquellos que no creen que el impuesto es constitucional. Nuestra palabra no tiene autoridad, la tiene la de ese gran jurisconsulto.

Cuando el señor Senador por Santiago usó la palabra y dijo que el impuesto era inconstitucional, esperaba oír algunas razones fundamentales que me hicieran cambiar de opinión, porque yo siempre estoy dispuesto a escuchar las buenas razones que se dan....

Sr. Rojas—Yo le había escuchado con sumo objeto, y, sin embargo, no me ha convencido.

Sr. Figueroa—El señor Senador por Santiago se ha limitado á decir que el impuesto era perfectamente constitucional....

Sr. Rojas—Y he dado las razones.

Sr. Figueroa—Yo soy el primero en reconocer que hay casos en que es necesario dictar leyes excepcionales, pero es cuando hay de por medio altas razones de patriotismo que así lo aconsejan, ó cuando se invoca aquella otra razón suprema de la salud pública.

Sr. Rojas—Mejor es aplicar esos principios que invocarlos.

Sr. Figueroa—Esta razón, la necesidad, sería problemática, pero la acepto. Las déjesenos siquiera el derecho de discutir el punto constitucional, cuando en su apoyo tiene, no mi opinión, sino la de ese gran jurisconsulto que he citado.

Es la segunda vez que vienen á la consideración del Congreso argentino estos impuestos, la primera fué en las sesiones extraordinarias, cuando el señor Ministro de Hacienda los introdujo como una innovación á nuestro sistema rentístico.

Sobre esto llamo la atención del honorable Senado.

Voy á hacer una observación que recién me ocurre, y es: la necesidad armonizada con la oportunidad y el desarrollo industrial del país.

El señor Ministro hace un instante que ha tratado de demostrar una cosa que no encontraba en mi inteligencia, y es la siguiente: que imponiendo contribución á la fabricación nacional, favorecíamos esa industria, porque cuando hemos elevado el derecho aduanero, si es posible que esto fuera verdad, en un sentido, en el otro no es un axioma; lejos de eso, es un error gravísimo.

¿Qué es lo que constituyen á la fecha, señor Presidente—ó mejor dicho señor Senador, para que me conteste—las fábricas que tenemos en el interior y en el litoral? ¿dónde están? Si no tenemos propiamente industrias! El trigo,—que ya está amenazado de impuestos por el señor Ministro—las fábricas de fósforos que recién hace tres ó cuatro años que están establecidas....

Sr. Rojas—Las fábricas de fósforos llenan todas las necesidades de la Nación.

Sr. Doncel—Hace pocos días ha estado en casa un copropietario de una fábrica de alcoholes establecida en el Rosario y me ha dicho lo siguiente, que he comunicado al señor Ministro de Hacienda: debe estar muy rico el Gobierno nacional, cuando no nos cobra 100.000 pesos que debemos por impuestos internos de alcoholes. Esto de una sola fábrica.

Sr. Figueroa—Hay una fábrica, dice el señor Senador, á la que el Gobierno le ha hecho donación de 100,000 pesos, porque no se los ha cobrado.

Sr. Doncel—No le ha hecho donación.

Sr. Figueroa—Bien, no le ha hecho donación, pero no se los ha cobrado: es la misma cosa.

Sr. Doncel—He querido citarle un caso de una fábrica de alcoholes.

Sr. Figueroa—Acepto el dato, y no lo pongo en duda porque lo presenta el señor Senador. Pero respóndame: ¿qué fabricación nacional tenemos en la República Argentina, en los diferentes órdenes de industria como para que se vote semejante impuesto? Esa es mi pregunta. Podrá citarme una que otra fábrica, pero son muy pocas las que tienen alguna importancia.

El señor Ministro nos ha dicho que tenemos una gran producción de trigo, que es lo que nos va á salvar de la crisis que nos aqueja. Mañana se impondrá una contribución al trigo, como ya se ha insinuado y yo digo que si se grava al trigo como se grava los fósforos, los naipes.....

Sr. Rojas—¿Va á defender los naipes el señor Senador?

Sr. Figueroa—....tendrá dos impuestos, uno interno y otro externo; y estos dos impuestos ¿están justificados ante la sana economía, ante los principios de libertad que la Constitución preclama; y sobre todo, se justifica ante la necesidad de que las provincias vivan?

Yo pregunto al señor Senador: ¿qué diría si mañana el Congreso gravara con un fuerte impuesto la fabricación del azúcar y viniera á echar por tierra esa industria que tantos beneficios está llamada á reportar á la provincia de Santiago y otras? Ahí tiene un ejemplo.

Yo sostengo la causa de las provincias en esta ocasión, no por un principio egoísta, ni por aquello de la autonomía que va contra los principios nacionales, cuando es la Nación la que representa la dignidad de los Estados en el exterior: en este momento hablo en favor de esa soberanía, porque la contribución ó el impuesto es un incidente de ella, para su sostenimiento, para su vida, porque todavía son muy pobres.

Esto como razón capital.

En cuanto á la razón constitucional, no existe semejante facultad. Mañana los jueces declararán esta ley inconstitucional, y mucho peligrará la dignidad del Congreso, si ellos, aplicando la Constitución y las leyes, hicieran semejante declaración.

Y luego, señor, por esta otra razón: pueblos distantes, sin medios de comunicación, sin caminos, con poblaciones escasas, con el desierto que las ciñe, que es nuestra mayor desgracia, según la expresión de Sarmiento; con la explotación de la tierra todavía en embrión, ¿es posible decir: vamos á gravar con este otro impuesto las pequeñas fábricas de esos pueblos empobrecidos, cuando debemos más bien estimular su producción para fomentar sus pequeñas industrias?

Francamente, no sé dónde está el criterio de los que se llaman economistas. A mi juicio, por ese camino vamos á la ruina con este sistema rentístico.

Sr. Rojas—Pido la palabra.

Esta última parte del discurso del señor Senador, tan patética, no me ha conmovido; señor Presidente, en el sentido de inclinarme á defender, como él entiende que se defienden, los intereses de las provincias.

Cada uno entiende las cosas á su modo; yo entiendo defender esos intereses colocándome en el terreno en que me he colocado, y lamento el error en que creo se encuentra el señor Senador por Salta.

Yo creo que los intereses de las provincias están en el engrandecimiento nacional, están en el progreso de la Nación, y están en su desenvolvimiento económico y financiero en el perfecto orden regular: si la Nación se desenvuelve holgadamente con sus recursos, las provincias progresarán también.

Pienso, señor Presidente, que las provincias se encuentran perfectamente favorecidas: hablo de las provincias donde existe la posibilidad de que se implanten ó se desenvuelvan industrias de producción que puedan ser compatibles con la producción extranjera.

Creo que los verdaderos intereses de las provincias están en que estos impuestos aduaneros que se han establecido para favorecer sus industrias, se mantengan.

Pienso que esas provincias se arruinarán y alejarán por mucho tiempo su desenvolvimiento industrial, si ponemos al Congreso en la necesidad de desechar esos impuestos proteccionistas, para dejar establecida la libre introducción de todos los artículos similares que puedan servir para el consumo del país, porque la Nación necesita rentas; y, como ha dicho el señor Ministro, ó la busca y la forma por medio del impuesto

aduanero, ó, en cuanto las circunstancias exijan, por medio del impuesto interno. Repito, si este impuesto no pasara, lo felicito, pero, si desgraciadamente las ideas de los señores senadores que lo combaten triunfaran, tendríamos hoy mismo, y anticipadamente, una indicación en este sentido, que llegara este caso desgraciado, tendríamos que reconsiderar la Ley de Aduana, que nos sancionó, pidiendo que se rebajaran los impuestos proteccionistas para hacerlos por medio de la aduana, ya que no es posible hacerlo por medio de estos impuestos.

Sr. Pérez—Yo lo apoyaría.

Sr. Rojas—Perfectamente.

Si hemos establecido este sistema aduanero, estos impuestos proteccionistas favorecen el desenvolvimiento de nuevas industrias, ¿cómo vamos á incurrir en error, en nombre de una teoría enteramente oscura, que no tiene fácil demostración, el terreno constitucional en que se colocan los señores senadores, para volver sobre andado y matar esas industrias, después de haberlas dado algún tiempo protección, cuando todavía no han concluido de desenvolverse? Quiero simplemente traer á la consideración del Senado esta razón: que estos impuestos no pasan, debemos reconsiderar la Ley de Aduana y rebajar los impuestos proteccionistas establecidos. Verdaderamente ¿qué interés de las provincias defiende en el caso actual por los señores senadores por Salta y San Juan, al defender la industria de los fósforos y de los naipes? Pero acaso es la producción de las provincias ¿qué interés de las provincias están defendiendo, cuando defienden el impuesto, cuando se trata de establecer para los naipes y los fósforos? ¿Esto es hacer teoría al aire?

Sr. Gil—Lo que tengo que hacer, señor Presidente, es rectificar una opinión que me ha atribuido el señor Senador por Santiago. El decía que yo sostenía que el impuesto interno sólo se podía establecer en casos extraordinarios.

Sr. Rojas—Lo dice la Constitución.

Sr. Gil—Yo no lo digo y creo que la Constitución tampoco lo dice. Yo sostengo que el impuesto que está en discusión, no se puede poner en ningún caso, ni en los mayores apuros, ni aunque invadiera la Nación un enemigo exterior...

Sr. Rojas—Perfectamente; se muestra más radical ahora el señor Senador. No estuvo en ese terreno hace un momento; la discusión lo lleva más lejos del terreno en que se colocó antes.

Sr. Gil—Yo he sostenido que pueden ponerse impuestos internos, pero no los que

proponen
cional
establec
las pr
cho el
Sr. I
por Sal
Sr. C
orias
ceptar
aliqui
entaja
ción
uede s
Sr. I
Cons
lento
modo.
Sr. C
cons
isma
Y si
queda
de de
ñor
ierta
digo q
mina
ortaci
by....
Sr.
Sr.
juicio,
mi, es
bunca,
por ni
Hay
antes,
establece
hacerlo
Sr.
Sr.
minos,
no me
ni á la
Senad
la faz
proyec
el artí
Sr.
que es
Sr.
impue
rial, p
menta
Sr.
Sr.
aquel
sumen
consu
inquil

proponer el señor Ministro que son inconstitucionales y que, por lo tanto, no pueden establecerse en ningún caso. Yo no defiendo ni las provincias ni los fabricantes, como ha dicho el señor Senador por Santiago....

Sr. Rojas—Me refería al señor Senador por Salta.

Sr. Gil—Ni aunque fueran ciertas las teorías del señor Ministro de Hacienda, aceptaré este impuesto, porque para mí, cualquier cosa que él produzca, cualquier ventaja que nos traiga, primero está la Constitución que, para mí, es una valla que no puede salvarse.

Sr. Rojas—Pero antes están los fines de la Constitución que tienden al engrandecimiento nacional, lo que se consigue de este modo.

Sr. Gil—El engrandecimiento nacional se consigue por los medios que establece la misma Constitución!

Y si para ello y si para que la Nación pueda pagar sus deudas es necesario quitar los derechos de importación, como decía el señor Senador por Santiago, hablando en cierta manera como si nos amenazara, yo le digo que votaré por la disminución, por la eliminación de todos los derechos de importación, pero no votaré nunca por esta ley....

Sr. Rojas—Cometería un grave error.

Sr. Gil—Será error tal vez; pero, á mi juicio, es más error sancionar esta ley; para mí, este impuesto no puede establecerse nunca, en ningún caso, por ningún motivo, por ninguna razón.

Hay otros impuestos internos, como dije antes, que el Gobierno nacional puede establecer y ya dije la manera cómo puede hacerlo.

Sr. Rojas—Pero á los naipes, no.

Sr. Gil—Yo he hablado de naipes, ni de vinos, ni de ninguna industria en particular; yo me refero á las ventajas que producirían ni á las teorías que ha establecido el señor Senador; encaro puramente la cuestión bajo la faz constitucional, y encuentro que ese proyecto choca directa y abiertamente con el artículo de la Constitución que he citado.

Sr. Doncel—Partiendo del principio de que es directo el impuesto.

Sr. Pérez—En ese caso es también un impuesto indirecto la contribución territorial, porque el propietario tendrá que aumentar el alquiler de la casa y en resumen...

Sr. Gil—No es impuesto indirecto.

Sr. Pérez—El señor Senador dijo que aquél era impuesto indirecto, porque en resumen el que iba á pagar el impuesto era el consumidor; y yo digo; en este caso, es el inquilino el que pagaría el impuesto de la

contribución territorial porque el dueño le aumentaría el alquiler de la casa.

Sr. Gil—No he dicho eso.

Sr. Pérez—Pero eso se deduce de sus observaciones.

Sr. Gil—He dicho que impuesto indirecto es aquel que aumenta el valor de la propiedad ó cosa sobre que recae.

Sr. Pérez—Aquel que recae sobre el consumidor.

Sr. Gil—En último caso lo paga el consumidor.

Sr. Pérez—Pero en el caso á que me refiero, en definitiva lo paga el inquilino.

Sr. Presidente—Invito á la Cámara á pasar á cuarto intermedio.

Sr. Gil—Voy á concluir, y á contestarle al señor Senador por Jujuy que esta es la distinción que hacen todos los libros de ciencia, y, además, he citado sentencias de tribunales que determinan qué es impuesto directo y qué es impuesto indirecto: no puede decirse que cualquiera es impuesto directo.

—La Cámara pasa á cuarto intermedio

—Después de algunos momentos vuelven al recinto los señores senadores, y dice el

Sr. Presidente—Continúa la sesión.

Sr. Gálvez—Pido la palabra.

La cuestión que se debate es de suma trascendencia por cuanto se trata de establecer la existencia ó no existencia de la facultad del Congreso para crear los impuestos que el proyecto denomina internos; y debo declarar con franqueza, señor Presidente, que después de oír á mis honorables colegas, he sentido dudas en un espíritu y perplejidades en mi opinión, que al fin he disipado con el estudio atento y meditado de los artículos 4º y 67 de la Constitución, según cuya letra y espíritu voy á sostener la constitucionalidad del proyecto que discutimos.

La República Argentina tiene su sistema rentístico definitivo y permanente, formado con la fuente de recursos que determina el artículo 4º de la Constitución, que me voy á permitir leer y que dice así:

•El Gobierno federal provee á los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación hasta 1866, con arreglo á lo estatuido en el inciso 1º del artículo 67; del de la venta ó locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos, de las demás contribuciones que, equitativa y proporcionalmente á la población, imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que

decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación, ó para empresas de utilidad nacional».

El Tesoro Nacional, que es permanente, se forma y se constituye, pues, con estos recursos producidos por los impuestos que este artículo designa y que es lo que determina el sistema rentístico de la Nación en su vida ordinaria y en su marcha regular, en la que anualmente el Congreso vota los fondos y su distribución dentro de aquel sistema.

Pero tal sistema ¿es malo? ¿No es visible la conveniencia de sustituirlo por otro más benéfico á la Nación?

En estos momentos, señor Presidente, está fuera de lugar la discusión de este punto, desde que el Congreso no puede reformar la Constitución por leyes reglamentarias de la misma.

Si el sistema rentístico de la Constitución se cree malo, no hay más derecho por parte del Congreso que declarar su reforma y convocar una Convención que la tome en cuenta. Nada más se puede hacer en este sentido ni aun en nombre de la conveniencia, ni en nombre de la necesidad.

Y es por esto que no adhiero á la opinión del señor Ministro, que para apoyar el proyecto nos decía que era necesario sustituir al sistema actual un sistema de impuestos, que él llama internos, como si no fueran internos todos los impuestos que cobra la Nación, ya los establezca sobre los objetos de producción nacional ó sobre los que vienen del exterior.

Pero dejando de lado esta impropiedad que por honor á los principios debíamos rectificar, decía, señor Presidente, que los impuestos permanentes, ordinarios y generales que menciona el artículo 4º de la Constitución, son la base de su sistema rentístico que, bueno ó malo, debemos poner en práctica.

Ahora bien, ¿entre esos impuestos y en ese sistema, figuran y pueden caber los impuestos que crea el proyecto en discusión?

De ninguna manera: basta leer el artículo 4º para declarar que este proyecto no está autorizado por él y aunque es contrario á él, pues estableciendo impuestos directos no les asigna, como base de la proporcionalidad, la población de la República.

El proyecto, pues, no puede sostenerse como constitucional aplicando el artículo 4º de la Constitución que fija, como decía, las fuentes generales y permanentes del tesoro de la Nación; de lo cual lógicamente no se deduce sino esta consecuencia: los llamados impuestos internos por el proyecto en discusión no pueden ser, constitucionalmente,

impuestos ordinarios y permanentes de la Nación.

Pero ¿podrán ser impuestos extraordinarios y transitorios? Creo que sí, y voy á mostrarlo.

Pueden llegar casos en que los recursos generales y ordinarios de la Nación basten para llenar las necesidades de la defensa común, del bienestar general y de seguridad, y en tales casos la Constitución ha previsto en el inciso 2º del artículo 67 una manera de arbitrar recursos, por medio de impuestos directos, por tiempo determinado y proporcionalmente iguales en todo el territorio.

Debo hacer notar que estos impuestos tienen la misma base que los directos permanentes de que habla el artículo 4º, cuales deben ser proporcionales á la población, mientras que aquéllos sólo deben proporcionalmente iguales en toda la Nación.

Y bien, pues, ¿estamos en el caso que prevé el inciso 2º del artículo 67 de la Constitución?

Indudablemente que sí.

En primer lugar, todos estamos de acuerdo en la urgencia de procurar fondos al Tesoro cuyas necesidades son conocidas en estos momentos: en segundo lugar, el proyecto crea impuestos por tiempo determinado proporcionalmente iguales en todo el territorio, naciendo de todo esto el carácter transitorio y extraordinario de tales recursos y por último los impuestos creados son directos.

Realizadas, por tanto, todas las condiciones establecidas por el inciso 2º del artículo 67 citado, es forzoso concluir que el proyecto en discusión es perfectamente constitucional.

Pero, señor Presidente, se ha dicho que los impuestos de que el proyecto trata son directos, porque no hay más impuestos directos que los establecidos sobre la propiedad de la tierra.

A este respecto, es preciso fijar el alcance de los términos, «impuestos directos é indirectos» que sin duda alguna nuestra Constitución emplea en la acepción que les da la ciencia económica.

A mi modo de ver, son impuestos ó contribuciones directas las que se pagan por el capital y por los bienes, sin relación alguna al precio de su venta ú otro acto subsiguiente; y son indirectos los que gravan el consumo y no los paga al Estado directamente el consumidor, sino que los paga indirectamente y por medio de aquel á quien la compra ó de quien los adquiere.

Y así paga impuestos directos no sólo

dueño d
en ella
objetos
nal; y á
que eje
caderías
quien er
El pro
sumo, al
de venta
impuesto
ciones ó
el capita
ducción
Resun
impuest
lucionali
recursos
oro, co
ción; pe
transitor
con el in
cripción
proyecto
Por lo
rancia
porque e
rentes co
damenta
vo de és
En mi
derechos
do parte
medida
que son
nicos no
aplicand
de nuest
bien al v
discusión
He di
Sr. d
Quiero
muy po
dispuesto
tusión.
La m
graves, s
terreno
que se la
principio
Nosotr
que está
do en n
el mome
pues pro
están en
colegas, j
quier co
mis duda
la constit

permanentes de
tos extraordina
e sí, y voy á
que los recur
de la Nación
idades de la
general y de
la Constituc
del artículo 67
s, por medio
po determin
es en todo el
tos impuestos
los directos p
artículo 4º
nales á la p
s sólo debent
en toda la N
en el caso
o 67 de la C
amos de acuen
ondos al Tes
ocidas en es
ar, el proyec
determinado
en todo el t
esto el carác
de tales recur
creados son
das las condic
o 2º del artícu
ncluir que el p
fectamente co
se ha dicho
oyecto trata
y más impues
os sobre la p
o fijar el alca
directos é in
a nuestra Con
ción que les da
impuestos ó co
e se pagan por
n relación algu
o acto subsigu
gravan el con
do directamen
s paga indirect
quel á quien
uiere.
directos no sólo

dueño de la tierra y el de las haciendas que en ella pastan, sino también el dueño de los objetos de producción ó fabricación nacional; y á su vez, paga impuestos indirectos el que ejerce el comercio de la venta de mercaderías en cuyo precio el consumidor es quien en definitiva tiene que abonarlos.

El proyecto entonces, al no gravar el consumo, al no imponer con relación al precio de venta de las cosas, se abstiene de crear impuestos indirectos y sólo crea contribuciones ó impuestos directos que pesan sobre el capital ó los bienes que forman la producción y la riqueza nacional.

Resumiendo lo expuesto, resulta que los impuestos que establece el proyecto, constitucionalmente no pueden decretarse como recursos ordinarios y permanentes del Tesoro, conforme al artículo 4 de la Constitución; pero pueden decretarse como recursos transitorios y extraordinarios de acuerdo con el inciso 2º del artículo 67, cuyas prescripciones, como lo he demostrado, llena el proyecto en discusión.

Por lo demás, no hay que temer que su sanción cercene facultades á las provincias, porque en esta materia las tienen concurrentes con la Nación, desde que la ley fundamental no ha declarado derecho exclusivo de ésta la creación de tales impuestos.

En mi opinión, señor Presidente, no hay derechos antagónicos que salvar, y he tomado parte en este debate sin creer comprometida ninguna facultad de las provincias, que son la Nación y cuyos intereses armónicos no hay mejor medio de defender que aplicando estrictamente esta Constitución de nuestra patria, que yo entiendo aplicar bien al votar favorablemente el proyecto en discusión.

He dicho.

Sr. del Pino—Pido la palabra.

Quiero á mi vez, señor Presidente, decir muy pocas para fundar el voto que estoy dispuesto á dar á favor del proyecto en discusión.

La materia del impuesto es de las más graves, sea que se le considere dentro del terreno de la Constitución que nos rige, sea que se la mire pura y simplemente ante los principios económicos ó financieros.

Nosotros tenemos un sistema rentístico que está clara y terminantemente consignado en nuestra Constitución, y creo que por el momento no debo hacer un análisis de él; pues prefiero, por motivos especiales que están en el conocimiento de mis honorables colegas, prefiero, digo, dejar á un lado cualquier consideración que pudiera aumentar mis dudas ó mis perplejidades en cuanto á la constitucionalidad del proyecto, para le-

vantarme por arriba de todo eso y prestar mi voto á la sanción de esta ley.

No voy, pues, á detenerme en definiciones ó aclaraciones en cuanto á lo que debe entenderse por contribuciones directas ó indirectas, denominaciones que tienen un concepto científico que, á mi juicio, es fácil de establecer, pero que no debe sobreponerse á las exigencias superiores de un país, sobre todo cuando hay dudas en cuanto á ese concepto, como sucede en el presente caso.

Por otra parte, se trata de impuestos que están en vigencia desde principio del corriente año, sin que hasta la fecha, á lo menos que yo sepa, nadie haya reclamado por razón de la inconstitucionalidad de ellos, haciendo así hoy parte de las rentas de la Nación. No por esto, señor Presidente, vaya á creerse que hallo exactas las teorías del señor Ministro, al asegurar, como lo ha hecho, que en estas contribuciones se favorece á la industria nacional respectiva, en un tanto igual al derecho de importación á la producción similar extranjera.

Paréceme que, de cualquier modo que se considere el punto, resultará siempre que se impone un gravamen, una carga á las industrias del país, algo así como un recurso extraordinario, si bien impuesto por circunstancias de carácter especial.

En este sentido y en concordancia con los fines primordiales de la Constitución, pienso, de mi parte, que toda duda ó vacilación en cuanto á la legalidad de estos impuestos que ya fueron sancionados, debiera hacerse á un lado y aceptarlos como una exigencia mayor en la vida de la Nación, sacrificando, diré así, y hasta cierto punto en aras de intereses supremos, una convicción más ó menos arraigada ó una duda por lo menos; pero sin que esto quiera decir, de ninguna manera, que esos impuestos deben ser permanentes, sino todo lo contrario; pues los acepto de mi parte con el carácter transitorio que reviste todo recurso aconsejado por el bien general del Estado en momentos ó circunstancias especiales.

He sentido la necesidad de hacer estas ligeras aclaraciones por lo que á mí toca, ya que no es posible por el momento entrar á otro orden de consideraciones.

Sr. Figueroa—Pido la palabra.

Yo voy á votar en favor del proyecto en general por razones de diversa índole de las que he escuchado de boca del señor Ministro.

Sr. Presidente—Se va á votar si se aprueba en general el proyecto en discusión.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—En discusión el artículo 1º.

Sr. Tello—Pido la palabra.

Ha circulado, señor Presidente, entre los señores senadores una carta impresa, suscrita por firmas conocidas, indicando la conveniencia de suprimir el impuesto á los licores alcohólicos, que por este proyecto se grava con diez centavos por litro. La disminución en la percepción del impuesto no es considerable, aumentar cinco centavos más á los alcoholes, de manera que, en vez de siete centavos, tendrían doce centavos por litro.

Suprimiendo el impuesto que por este proyecto se asigna á los licores alcohólicos, se impondría doce centavos á los alcoholes que es verdaderamente la materia prima.

Las razones que en esa carta se dan, me parece que deben llamar la atención de los señores senadores.

Efectivamente, el impuesto á los licores alcohólicos se va á prestar á defraudación, porque cualquiera, dada la facilidad de fabricarlos, va á burlar la vigilancia fiscal y va á resultar en gran parte ilusorio este impuesto; no solamente ilusorio, sino gravoso á los grandes industriales, porque ellos no podrán excusarse y recibirán una competencia perjudicialísima, como he dicho. Esto resulta á primera vista.

Por otra parte, por este medio se favorecen las falsificaciones, con daño de la salud pública, porque no sufrirán el control de nadie y los grandes fabricantes están sujetos al control de todos.

Como me decía uno de ellos, hasta dentro de un baúl se puede hacer la falsificación; y siendo esto así, no es posible que el fisco se aperciba.

Vuelvo á repetir: por medio de este impuesto se va á proteger las falsificaciones con daño de la salud pública; se va á perjudicar á los verdaderos licoristas, por la competencia que les harán estos falsificadores; y en tercer lugar, no se concibe el objeto de la percepción, por las facilidades que hay para excusar el impuesto.

Ahora queda como argumento lo que enuncié anteriormente: la circunstancia de que va á disminuir considerablemente la percepción del impuesto que se ha tenido en vista; pero por esa razón es que se grava la materia prima con cinco centavos que lo va á abonar? ¿quién? también los licoristas.

Se dice que no se sabe verdaderamente cuándo un impuesto lo paga el consumidor ó cuándo recae en todo ó en gran parte sobre el productor.

Me explico esta duda cuando los objetos no son determinados ó están muy distribuidos; pero tratándose de objetos determinados y de productores también determinados por su pequeño número, entonces viene el

concierto y se uniforman fácilmente los productores para uniformar el precio de su producto y por este medio quien verdaderamente paga es el consumidor.

Así que los licoristas no se recargan es el argumento á hacerse, argumentando se hizo en la honorable Cámara de Diputados.....

Sr. Doncel—¿Me permite una intervención el señor Senador?

Sr. Tello—Sí, señor.

Sr. Doncel—La razón especial que habido para proyectar este impuesto sobre los licores es que la industria de los licores está determinada generalmente por una necesidad sin responder esta industria á una necesidad.

Hablando con el señor Ministro sobre este mismo asunto, ha llegado á convenir lo siguiente: que en realidad este impuesto debería corresponder más bien á las municipalidades ó á los gobiernos de provincia porque se trata de industrias en pequeña escala que se reducen á llenar las necesidades de la localidad donde se producen.

Entonces, estando de acuerdo el señor Ministro en esto, voy á proponer suprimir el impuesto sobre licores, sin aumentar el impuesto sobre los alcoholes, porque los alcoholes responden también á necesidades industriales.

Sr. Tello—Continúo.

Principié por decir que había versado en discusión en la Cámara de Diputados sobre este punto, porque tenía también mucho apoyo la idea de la supresión del impuesto á los licores alcohólicos; pero se hizo resistencia con motivo de creer que esto influiría poderosamente sobre la disminución de los impuestos.

Por eso, para conciliar las opiniones (ahora llega la ocasión de contestarle al señor Senador) para conciliar las opiniones, estoy yo pido que se mantenga en cinco centavos es decir, la mitad de lo que se pone á los licores alcohólicos.

Yo acepto entonces, puesto que el señor Ministro está de acuerdo con estas ideas.

Sr. Presidente—Se va á votar el inciso 3º, que ha sido observado.

—Se vota si se aprueba este inciso y resulta negativa de 7 votos.

Sr. Rojas—Pido que se rectifique la votación.

No veo por qué se ha de suprimir el impuesto á un vicio.

Sr. Presidente—Se rectificará la votación.

—Se rectifica, y da el mismo resultado.

ente los
cio de
eramente
ecargan
gument
a de D
una int
pecial
puestos
e los
por un
una p
tro, sob
conven
se im
á la
le proy
en p
s ne
ducen
do el
er, sup
gument
arque
neces
ver
ados
ién
el im
hizo
ho inf
ción
ones
señor
nes, e
o cent
he á lo
e el
e ide
ar el
este
tos.
que la
nir el
ará la
ismo r

Sr. Rojas—Hay todavía duda respecto a la votación que acaba de tener lugar. No se ha computado el voto del señor Senador Figueroa que, según me manifiesta, está por el impuesto.

Sr. Pérez—Entiendo que hay dos mociones: una del señor Senador por Jujuy para suprimir este impuesto y gravar con cinco centavos más los alcoholes; y otra del señor Senador por San Juan para que se quite por completo el impuesto, con lo cual parece que estaba conforme el señor Ministro. Ahora se dice que el señor Ministro mantiene el impuesto.

Sr. Doncel—Debo aclarar este punto: el señor Ministro no había comprendido lo que se proponía.

Sr. Rojas—Cuando se ha dado cuenta, se dijo que no acepta la supresión.

Sr. Tello—Yo propuse: 1º la supresión del impuesto á los licores alcohólicos; 2º el aumento de cinco centavos á los alcoholes. Después, en vista de las manifestaciones del señor Senador por San Juan, he retirado la segunda parte de mi moción, pero queda subsistente la primera.

Sr. Pérez—Yo estoy de acuerdo con la supresión del impuesto á los licores, siempre que se aumente á los alcoholes.

Sr. Rojas—Vamos á votar la primera parte, y en seguida el señor Senador puede proponer el aumento á los alcoholes.

Sr. Presidente—Se va á rectificar una vez más la votación: si se aprueba el impuesto á los licores alcohólicos.

—Se vota, y resulta negativa de 7 contra 8.

—El artículo 2º se aprueba sin observación.

—En discusión el 3º.

Sr. Gil—Las disposiciones de este artículo son de legislación municipal. La higiene está fuera de las atribuciones del Gobierno nacional.

Sr. Rocha—Es muy exacta la observación del señor Senador. Es completamente municipal y además, en todas partes, donde se hiciera efectivo este impuesto, el Gobierno nacional tendría que costear una oficina científica.

Sr. Presidente—Habiendo sido observado este artículo, se va á votar.

—Se vota, y es rechazado.

—Se aprueba el artículo 4º.

—Se lee el 5º.

Sr. Tello—La palabra *licores* está de más, desde que se ha suprimido el impuesto á los licores.

—Se aprueba el artículo, suprimiendo la palabra *licores*.

—Se aprueba sin observación el resto del proyecto.

Sr. Doncel—Hago moción para que se levante la sesión.

—Apoyado.

—Se vota si se levanta la sesión resulta afirmativa.

—Eran las 7 p. m.